

EL MICROCREDITO EN EL AGRO COLOMBIANO UNA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, EN LA TRANSFORMACIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL

Manuel Pérez Vásquez¹, Helmer Muñoz Hernandez², Benjamín Castillo Osorio.³

Resumen:

La problemática de la tierra en Colombia, ha estado acompañada por falta de voluntad y una profunda omisión estratégica en los planes que el Estado colombiano desarrolla para el crecimiento y la recuperación del agro, este artículo procura por la consideración de elementos teóricos de carácter económico, empresarial y comercial, que permitan mostrar los vacíos y falencias que poseen los planes que se direccionan hacia ofrecer crecimiento al agro, así mismo los pocos resultados encontrados como respuesta de los planes para este fin, los cuales sin la aplicación efectiva de los elementos que se plasman a lo largo del artículo, difícilmente alcanzarán los resultados esperados y mucho menos contribuirían a la generación de empleo.

Palabras Clave: Políticas Económicas, Crecimiento, Sustentabilidad, Competitividad.

¹ Profesional en Negocios y Finanzas Internacionales, Especialista en Negocios Internacionales, magister en negocios internacionales e integración Master MBA en Administración y Dirección de Empresas y PhD. en Ciencias Sociales Mención Gerencia. manuelpervez@unisinu.edu.co

² Docente investigador Grupo de investigación CUS de la Universidad del Sinú. Ingeniero de Sistemas de Información, Magister en Ingeniería de Control Industrial de la Universidad de Ibagué y Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Doctor en Gerencia de la Universidad Rafael Bellosillo Chacín de Venezuela. Candidato a Post Doctor en Procesos Sintagmáticos de la Ciencia y la Investigación del Centro Internacional de Estudios Avanzados Sypal. helmermunoz@unisinu.edu.co

³ Docente investigador de la Universidad del Sinú. Economista y Magister en Planeación Urbana de la Universidad Nacional de Medellín. benjamincastillo@unisinu.edu.co

Abstract:

The problem of land in Colombia has been accompanied by a lack of will and a profound strategic omission in the plans that the Colombian State develops for the growth and recovery of agriculture, this article seeks to consider theoretical elements of an economic, Business and commercial, that allow to show the gaps and shortcomings that have the plans that are directed to offer growth to the agro, as well as the few results found as a response of the plans for this purpose, which without the effective application of the elements that are Throughout the article, will hardly achieve the expected results and much less contribute to the generation of employment.

Keywords: Economic Policies, Growth, Sustainability, Competitiveness.

Antecedentes

El tema del microcrédito en el mundo, tiene su antecesor en las microfinanzas, y este concepto surge debido al economista nacido en Bangladesh y formado en Estados Unidos, Muhammad Yunus (Premio Nobel de Paz en el año 2006). Éste economista observa que en su país hay la imposibilidad por parte de la gente de muy bajos recursos de acceder a pequeñas sumas de dinero a través del sistema formal o bancario, debiendo recurrir a usureros o prestamistas. Yunus lleva esta inquietud a los bancos, quienes rechazaron enfáticamente cualquier posibilidad de prestar dinero a este tipo de personas, sin garantías. Sin embargo, Yunus convence a los bancos de otorgar los préstamos ofreciéndose como garante. El éxito de la propuesta, la devolución completa del dinero prestado (tasas de recuperación del 97%) y una manifiesta necesidad, motiva a Yunus a desarrollar un proyecto de Banco para los Pobres, que hoy es conocido mundialmente como el Banco Grameen; y que tiene como ejes principales la formación de grupos solidarios para la solicitud de préstamos, la participación por parte de los prestatarios en la organización del banco y el cobro de tasas de interés no subsidiadas. (CATULLO, 2006.).

La lógica del microcrédito en el Banco Grameen, no se mueve por medio de las garantías del préstamo, sino por la confianza que estaba representada en un grupo de personas pobres que

se apoyan mutuamente y garantizan el repago. Ellos son considerados valiosos sujetos de crédito y empresarios potenciales. La única condición o requisito es que los microcréditos han de solicitarse junto con otras cuatro personas. Si uno de los cinco prestatarios deja de pagar, automáticamente las posibilidades de créditos futuros de las otras cinco personas terminan, medida que refuerza no sólo la responsabilidad personal sino también la solidaridad de grupo. Además, se solicita a los beneficiarios su adhesión voluntaria a un listado con algunos puntos que se orientan a cambiar costumbres sanitarias y fomentar en la familia la pertenencia de grupo, así como la educación de los hijos (RESTREPO DE ARANGO, 2003).

Este sistema basado en la confianza y en la autogestión se convierte en dos variables que plantean retos para cualquier administrador de recursos crediticios, y podrían ser considerados los mayores activos de esta institución. Los beneficios que, la capacitación, la educación y la eliminación de intermediarios, pueden producir en los sectores más vulnerables es indiscutible en los proyectos que han replicado la experiencia del Grammen.

La incidencia del Microcrédito en lo económico y social

El microcrédito inicialmente era otorgado a grupos es decir, se establecía una responsabilidad compartida, y en el propósito de ejercer presión al grupo para no incurrir en mora, reduciendo el riesgo de crédito. El incentivo de pago consiste en que una vez los beneficiarios han terminado de cancelar las cuotas completa y oportunamente, pueden acceder a otro crédito por un mayor monto y un mayor plazo. Este incentivo también contribuye a reducir el riesgo de crédito (YUNUS, 1997). El profesor Muhammad Yunus, en su libro “Hacia un mundo sin pobreza” expone repetidamente y con varios argumentos que el riesgo de crédito de los préstamos otorgados a las personas de bajos recursos es muy bajo, porque abolir la dependencia del agiotista, obtener rentabilidad y reconocerse como sujeto de crédito –palabra que originalmente significa “confianza”-, constituye un incentivo para pagar las cuotas del crédito.

En cuanto a la tecnología micro crediticia original, en el microcrédito no existen garantías como las concebidas en los créditos ordinarios. Se consideraba que la mejor garantía de pago es el incentivo de acceder a nuevos créditos, la responsabilidad compartida del crédito, y

sobre todo la capacidad de pago que depende de la actividad productiva que se va a financiar. Según la mayoría de autores, el análisis de la capacidad de pago del cliente es lo que más encarece el microcrédito y en general los servicios micro financieros, puesto que se trata precisamente de personas que no tienen historial crediticio en ninguna entidad y que en la mayoría de los casos tampoco llevan ningún registro de sus operaciones, lo que significa que hay que empezar por levantar toda la información necesaria.

Algunos autores analizan el impacto de las microfinanzas y/o el microcrédito en la economía en general; uno de ellos, (ROMANI CHOCCE, 2002) ofrece una explicación de por qué debería esperarse un impacto determinado de las microfinanzas y el microcrédito en particular. Este autor habla de la “Cadena de Impacto” al conferir que: “Estos servicios micro financieros, llevan al cliente a modificar sus actividades micro empresariales, lo cual, lo lleva a aumentar o disminuir los ingresos de la microempresa. El cambio en los ingresos de la microempresa produce cambios en el ingreso del hogar el cual lleva a una mayor o menor seguridad económica en el hogar. El nivel modificado de seguridad económica en el hogar lleva a cambios en los niveles educativos y de habilidades, y en las oportunidades económicas y sociales”. Según esta autora, esta cadena de impacto es útil para distinguir dos escuelas de pensamiento. La escuela de “beneficiarios”, que pretende medir el impacto de las microfinanzas sobre los individuos y sobre los hogares, considerando que el impacto se mide distinguiendo quién y cómo se beneficia de las microfinanzas. Y por el otro lado la escuela de los “intermediarios”, que prefiere medir el impacto a través de los cambios en las instituciones financieras y sus operaciones, incorporando nociones de sustentabilidad.

En atención a lo anterior, las unidades de medida en los estudios de impacto del microcrédito suelen ser el hogar, la microempresa o las instituciones que prestan servicios micro financiero. Los estudios relacionados con el impacto de las microfinanzas en la economía, conllevan al análisis de muchas variables unas de tipo económico, otras de tipo social y en lo financiero como tal.

En lo económico, se considera que el microcrédito genera empleo, incide sobre el incremento de la productividad, en el crecimiento de la microempresa, y el aumento del ingreso (tanto

de la empresa como del hogar), entre otros aspectos. En cuanto a lo social, el microcrédito es colaborativo en la reducción de la pobreza, el empoderamiento de la mujer y la mejora de la salud, la educación y la alimentación, y hasta la reducción de la fertilidad, entre otros. También se tiene en cuenta que el microcrédito tiene un significativo impacto en los mercados financieros, debido a que aumenta la oferta de productos y servicios financieros y expande el mercado de las entidades financieras.

En la teoría económica se ha argumentado que el acceso al crédito es una de las variables del crecimiento empresarial, debido a que el microcrédito promueve necesaria y directamente el desarrollo empresarial, micro empresarial, y al hacerlo promueve el crecimiento y el desarrollo económico (ZARRUK G., 2005).

Townsendy y Kaboski en una investigación concluyen, que las familias con acceso al crédito invierten y consumen más que aquellas sin acceso a éste. En esa misma línea de pensamiento, Arce afirma que el impacto de las microfinanzas es diferenciado entre niveles de ingreso, según los estudios más recientes y mejor diseñados. En la mayoría de los casos los menos pobres entre los pobres poseen habilidades y capacidades mayores que les permiten aprovechar mejor los recursos y los servicios microfinancieros.

El Microcrédito en la zona rural América Latina

Es importante hacer un recuento acerca del funcionamiento de los microcréditos en América latina, por ser una necesidad puntual en esta zona del mundo para el desarrollo productivo, y en especial en el área rural.

En América Latina el microcrédito tiene una historia de más de 50 ó 70 años, dependiendo de los países. Esta práctica en la región ha sido particularmente intensa en algunos países, como es el caso de América Central, Bolivia y Perú; en donde han contribuido a generar un nuevo espacio de acceso al financiamiento a los sectores más pobres (GUTIERREZ, 2004).

Sin dudas, el microcrédito en Latinoamérica se ha extendido ampliamente en las zonas urbanas, y muy poco en las áreas rurales, se estima que menos del cinco por ciento de los hogares rurales tienen acceso al crédito formal, debido, en gran parte, a la percepción de alto

riesgo y elevados costos de la prestación de este tipo de servicios financieros. Las actividades económicas en el campo son intrínsecamente más arriesgadas que en otros sectores, debido a su vulnerabilidad a las crisis climáticas, a la volatilidad de los precios de los productos, y a las restricciones al comercio; y los hechos de violencia rural, que en un país como Colombia, es un factor significativo.

La agricultura a pesar de sus vicisitudes, sigue siendo la principal actividad de subsistencia para muchos habitantes de los países Latinoamericanos. Otro factor a tener en cuenta en la necesidad de que haya microcrédito en el área rural, es la competitividad. El mundo globalizado, impone competitividad al sector agropecuario, y en ese sentido, (WENNER, 2007) plantea que: el fácil acceso a la financiación es una de las principales formas de mejorar la competitividad de la agricultura; y por tanto, se deduce que los préstamos y las tecnologías, en particular, las técnicas de gestión del crédito rural deben mejorar.

Según (RODRÍGUEZ, 2010.), el sector agropecuario de América Latina y el Caribe se caracteriza por ser un sistema basado en actividades productivas informales que contribuyen a la supervivencia de gran parte de la población y por ello, se hace fundamental promover la innovación tecnológica y productiva del área rural, particularmente, el acceso a las tierras de cultivo, riego, educación, asistencia sanitaria básica, la equidad de género, la sostenibilidad económica y medioambiental, con el fin de generar diferentes modos de producción, comercialización y distribución de la riqueza socialmente justos, que contribuyan a satisfacer las necesidades de las familias y comunidades tradicionalmente excluidas de los procesos de desarrollo, para que los beneficios de éste lleguen a todos por igual y por qué no tener un mayor acceso al microcrédito (RODRÍGUEZ, 2010.).

Es notable en América Latina, la alta dependencia del sector rural para la generación de empleo, siendo este un factor que repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres. En atención a estas circunstancias de subdesarrollo, se hace necesario transformar la agricultura tradicional de baja productividad en una agricultura moderna y comercial, para generar tanto crecimiento como puestos de trabajo y aumentar la competitividad de los pequeños agricultores en los mercados dinámicos de alimentos y

prestar atención especial a las arraigadas desigualdades en el acceso a los recursos, los servicios públicos y las instituciones de apoyo. Para lograr estos los microcréditos en particular se convierten en herramientas indispensables (RODRÍGUEZ, 2010.).

El acceso a servicios financieros en América Latina, se estima en un 27% de la población, en comparación con otras regiones del mundo, esta ha sido muy limitado, debido a la imposibilidad que tienen los hogares y los pequeños empresarios de realizar inversiones en educación y en activos productivos, a través de mecanismos distintos a la reinversión de sus escasos ingresos y ahorros que limitan sus posibilidades de ascenso social (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2010).

En América Latina, son muchos los bancos comerciales que han incursionado en el sector de la microempresa de sus respectivos países desde mediados de la década de los años noventa. Esto lo han hecho, no solamente buscando un nuevo nicho de mercado, sino también como parte de sus operaciones globales. América Latina es entonces la parte del mundo en donde más bancos comerciales han incluido los productos y servicios financieros a la microempresa dentro de su portafolio de productos (OSSA, 2004).

También se considera que en América Latina, ha habido avances en función de la modernización de los sistemas financieros para la agricultura y el medio rural, aunque tal proceso, ha avanzado en unos países más que en otros. Sin embargo, este proceso aún tiene mucho por recorrer, sobre todo en aquellos países donde se han producido importantes vacíos institucionales con el retiro del Estado de esta función, sin que el sector privado lo haya reemplazado completamente, porque la agricultura continúa siendo un negocio riesgoso para la banca comercial y persisten los problemas de falta de garantías (ACEVEDO, 2002).

Se mencionan experiencias del sistema de microcrédito en América Latina, el cual algunas naciones, han tenido aciertos y otras mayores dificultades. En el caso de México, por ejemplo, la creciente polarización del sector financiero mexicano y las imperfecciones en el mercado crediticio, sobre todo en el sector agropecuario, han impedido que el escaso flujo de crédito llegue a pequeñas y medianas empresas, lo que afecta sus posibilidades de crecimiento. En este país, las decisiones de las instituciones financieras para seleccionar a

los productores como sujetos de crédito son el pertenecer a una organización y su nivel de capacitación en distintas áreas (producción, administración y comercialización). Los productores que cuentan con estas características tienen una mayor probabilidad de conseguir financiamiento (ESCALANTE, 2013).

En Perú, se menciona la institución de crédito denominada la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC), creada en 1986, basa su metodología de préstamos en el entorno donde el cliente comercializará su producto. Inicialmente realiza una evaluación de créditos en la cual se observa la experiencia del cliente, la unidad económica y familiar, las garantías y la capacidad y voluntad de pago. Dependiendo del resultado obtenido, se aprueba o rechaza el crédito. Cuando es aprobada la solicitud, el desembolso del dinero no se realiza en una sola cuantía; se hace en cuotas que dependen de las necesidades de liquidez del deudor y de la dinámica y venta del cultivo, que dependiendo del caso, pueden incrementar paulatinamente. Al final, en la etapa de seguimiento y recuperación del préstamo, se hace un proceso de monitoreo en el que los analistas visitan esporádicamente la actividad y hacen acompañamiento. Si por alguna razón climática o de mercado el cliente manifiesta que no le sería posible hacer el pago del préstamo, la entidad le otorga un préstamo paralelo para que pueda solventar la deuda y retomar su actividad (AGRICULTURA, 2010.).

El mercado financiero rural de Chile se caracteriza por tener un reducido y altamente segmentado. Los principales proveedores del crédito son los bancos comerciales, algunas cooperativas de ahorro y crédito, oferentes de crédito informal (proveedores de insumos y tecnologías). En Chile se menciona el INDAP, institución del Estado dependiente del Ministerio de Agricultura. A pesar de la presencia de numerosos proveedores, la dimensión de las finanzas rurales aún sigue siendo reducida, especialmente la que se refiere a pequeños productores. En el país existen una serie de instrumentos de financiamiento de segundo piso impulsados por el Estado, pero que no benefician mayoritariamente a la pequeña agricultura (CARO, 2003).

En cuanto a la experiencia boliviana en materia de microcrédito, se menciona que es una de las más ricas del mundo, los niveles de costos de transacción de las diferentes metodologías

crediticias en función de sus características operativas muestran que la metodología solidaria (de grupos) resulta ser la menos eficiente, tanto en el área urbana como en la rural (CARO, 2003).

En Bolivia, un modelo conocido como el modelo de Schreiner se constituyó como una referencia de todas las aplicaciones de calificación estadística para los clientes de microcrédito en ese país. Este modelo fue elaborado para Bancosol o Banco Solidarios S.A, ubicado en Bolivia cuya sucursal de La Paz en su momento se catalogaba como la agencia micro financiera con mayor número de clientes a nivel mundial, y en la que se contaba con un historial de crédito con información de 39.956 préstamos. Fue el primer banco privado comercial en América Latina especializado en servicios micro financiero (LARA, 2010).

Otro modelo implementado en Bolivia, fue el de Vogelgesand en 2003, quien desarrolló una aplicación que tenía como objetivo predecir el riesgo de impago en la entidad de microfinanzas boliviana de Caja Los Andes. El historial de crédito utilizado para su construcción fue montado a través de documentos gerenciales de la entidad y de anotaciones realizadas por los oficiales de crédito tras la ejecución de visitas programadas a los negocios y hogares de los prestatarios potenciales. Por tanto se tuvo una base de información de aproximadamente 76.000 clientes de la institución correspondiente al período de tiempo entre mayo de 1992 y junio de 2000. Las variables utilizadas se agruparon en variables personales del cliente, variables del negocio, variables del préstamo y variables del entorno. Entre estas se pueden encontrar, estado civil, género, Créditos no pagados en otras entidades financieras, edad, ingresos que proceden o no del negocio, entre otros (CARO, 2003).

Para el caso del Salvador, se fundó un programa de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños llamado Financiera Calpia. Su objetivo era mejorar las condiciones para la microempresa por medio de un grupo de presión y la provisión de servicios empresariales básicos. La principal característica que distingue a este modelo de los anteriores es el riguroso análisis para determinar si los solicitantes de crédito tienen capacidad de pago, considerándose sus activos, flujo de efectivo, el propósito del préstamo y el historial crediticio, aunque este se refiera a préstamos informales (GUACHAMÍN, 2007).

Historia del microcrédito en Colombia

En la era de los microempresarios, se resalta el periodo 1980-1996, cuando se asoció a los pobres con mujeres microempresarias que tenían activos para dar garantía. Enfoques nuevos para financiar a los pobres, denominados micro finanzas, se originaron en organización registradas como sin ánimo de lucro o bancos con estructura jurídica especial; estas instituciones se centraron en prestar pequeñas cantidades a individuos y grupos, con técnicas muy básicas de crédito y una variedad de mecanismos para incentivar el pago; el concepto que prevalecía era que los pobres eran capaces de amortizar los préstamos si se les proveía de incentivos apropiados, tales como el acceso a préstamos adicionales a una fecha predeterminada (KIRKPATRICK, 2002.).

En los años 90, mediante el gobierno colombiano instaló el Banco Agrario, una institución un poco más pequeña, cuya sostenibilidad financiera según algunos analistas está en duda ya que parece haber heredado clientes con malos hábitos de pago (CUEVAS, 2002).

Según (RAMÍREZ, 1994), los intermediarios financieros han operado con márgenes entre los 12 y los 18 puntos, teniendo en cuenta las diferencias entre las tasas de captación y las tasas efectivas de colocación, lo que repercute en altos intereses a los microcréditos.

En Colombia se han realizado estudios que diagnostican la evolución del microcrédito. Según Kirkpatrick y Maimbo, el microcrédito se puede dividir en varias etapas, una es la era del crédito subsidiado a la Agricultura, donde entidades principalmente del sector público, fueron las principales proveedoras de servicios financieros a los pobres; el pensamiento político que respaldaba esta idea era que la pobreza podía ser superada mediante un incremento en la productividad si se les otorgaba crédito a los pequeños agricultores; concediendo entonces créditos que no concedían garantías y con bajas tasas de interés; pero problemas como el paternalismo, arbitrariedad, prácticas corruptas, topes a las tasas de interés y otros condujeron a que las instituciones fallaran en su prestación de servicios. El caso que más resalta en esta etapa es el de la Caja Agraria, donde el estado invirtió durante setenta años cuantiosos recursos públicos, los cuales en su mayoría fueron destinados a

personas que no eran merecedoras de éstos, dejando resultados deplorables como una cartera cuantiosa irrecuperable dejando como única salida la liquidación de la institución.

Se destaca el Programa de Crédito para la Microempresa apoyado por el BID, dicha institución inicio su programa en asocio con la Fundación Carvajal, de acuerdo con (CASTAÑEDA, 2002.), el programa buscaba acelerar la industrialización del país; ya que la idea general que se desarrollaba era que debido a la carencia de conocimientos y capacitación general, los microempresarios presentaban dificultades para hacer crecer sus negocios.

Una institución que desde sus inicios ha contado con un enfoque más humano es el Banco Caja Social; el cual nació en el año de 1911, como Caja de Ahorros del Círculo de Obreros, y fue constituido en esencia para introducir en la clase obrera el concepto de ahorro y de sus beneficios. Para el año de 1972 cambió su razón social por la de Caja Social de Ahorros, manteniendo como principios fundamentales la democratización del crédito y el fomento del ahorro en sectores populares de estratos medios y bajos, que constituyen su mercado objetivo.

En el año de 1996 la Caja social de ahorros se convierte en el Banco Caja Social, renovando su compromiso con las personas naturales, pequeñas y microempresas del país.

Históricamente, las políticas de crédito se han aplicado a lo largo del territorio nacional en las últimas décadas, son políticas que han tenido limitaciones en cuanto a aspectos de cobertura, de montos de inversión, de focalización, de falta de compromiso de la banca nacional y de ineficiencia en general de parte del Estado y del gremio financiero, en cuanto a los altos márgenes de intermediación.

Para el año 2006, el gobierno implementa la política de la banca de las oportunidades, quizás el proyecto más agresivo de garantía de bancarización y microcrédito que habría tenido el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los errores cometidos en el pasado y que actuaría de la mano del sector financiero.

En Colombia, la oferta en microcrédito se agrupa en unos pocos bancos; uno de los principales, el Banco de Bogotá. Otras entidades también participan en el mercado de microcrédito: las ONGs como los denominados Bancos de la Mujer, o los Actuarios y unas

pocas fundaciones que aún hacen microcrédito directamente (por Ejemplo, la Fundación Mario Santo Domingo); también las cooperativas financieras, que están vigiladas por la Superintendencia Bancario y las Cooperativas de ahorro y crédito de vínculo cerrado. Recientemente entraron a Colombia dos nuevos bancos especializados en Microfinanzas: PROCREDIT y BANCAMÍA. Sin embargo, a pesar de que existen variedad de oferentes de microcrédito, para el sector del comercio menor se le dificultad el acceso al crédito, debido a diversos factores, como son los requisitos exigidos por los bancos, la falta de un manejo adecuado de tales recursos por parte de los comerciantes y las razones subyacentes en la falta de calidad crediticia (FOMENTO, 2011).

Según la encuesta de Fundes de 2003, de 687 Pyme, el acceso al financiamiento se clasificó como la segunda limitación más importante (particularmente para empresas más pequeñas, industriales y más jóvenes) en la creación, desarrollo o diversificación de sus actividades económicas (RODRÍGUEZ A. G., 2003). En este estudio, dentro de la categoría del acceso al financiamiento, las condiciones de crédito, relacionadas principalmente con tasa de interés, plazo, requerimientos de garantía y procedimientos para otorgar préstamos, se percibieron como los factores limitantes más significativos.

En la actualidad, el mayor acceso al crédito lo siguen teniendo el sector comercio, personas naturales y servicios, mientras que el de la construcción, el agropecuario y el de las comunicaciones continúan presentando las mayores restricciones.

El Microcrédito en la zona rural en Colombia

Para el caso colombiano, sobre la situación del microcrédito, este país presenta una de las coberturas bancarias más altas de Latinoamérica; existe una agencia por cada 10,200 habitantes, indicador que es superior a México y comparable con Brasil. En las zonas rurales existe una sucursal bancaria cada 16,300 habitantes y el 68% de los municipios rurales cuenta con una agencia, esto demuestra que el problema de acceso al crédito, por parte de los pequeños productores rurales en Colombia, no se debe a la inexistencia de agencias

bancarias, ni tampoco a la falta de recursos financieros, esto se explica, más bien, porque la banca, con muy pocas excepciones, mantiene un marcado sesgo urbano en la captación y colocación de recursos (CARO.j, 2003).

Se considera que determinados factores estructurales afectan la facilidad del crédito bancario hacia el sector rural. Se menciona que los campesinos colombianos, sobre todo los pequeños productores; tienen deficiencias tecnológicas, serios problemas de comercialización, dificultades para demostrar la documentación contable y no poseen las garantías necesarias. Y que unido a todo lo anterior, los costos de transacción, que les exige la legislación financiera a los bancos; como la obligación de provisiones por pérdidas y la imposición de una tasa de interés máxima legal, es lo que ha contribuido a desincentivarlos de participar en la oferta crediticia rural, y a percibir a los pequeños productores rurales como clientes de alto riesgo, y con una baja capacidad de pago (CARO, 2003).

A pesar de las dificultades que han existido en el marco de la acción del microcrédito rural en Colombia, si han habido avances significativos en los últimos veinte años, y ello ha ido a la mano de una profunda transformación del sistema financiero rural, que paulatinamente se está reconvirtiendo en un nuevo modelo de financiamiento agrícola y rural.

Se propone un nuevo modelo de desarrollo de los mercados financieros rurales, que se centran en el desarrollo de la sostenibilidad de las instituciones financieras rurales y en el fomento de una intermediación financiera, basados en la provisión de servicios orientados por la demanda, lo que incluye facilidades de depósitos y créditos tanto para actividades agrícolas como para las empresas rurales no agrícolas. El modelo reconoce que la provisión de servicios financieros debe estar acompañada de otras importantes medidas gubernamentales, para darle mayor sostenibilidad al modelo (ACEVEDO, 2002).

En el sector agropecuario los productores enfrentan un importante grado de incertidumbre, en ese sentido, generalmente las unidades de producción del sector agropecuario no asumen algún tipo de riesgo a menos que esperen un beneficio monetario (ESCALANTE, 2013). Es importante inferir, que el crédito se convierte en uno de los principales factores que impulsa la inversión y en consecuencia la productividad y el crecimiento de la producción

agropecuaria. La disponibilidad del crédito permite concretar los proyectos de inversión y elevar la productividad de las empresas pero, en contraste, si no se cuenta con mecanismos que permitan trasladar los ahorros de los prestamistas a los prestatarios, un país tiene pocas posibilidades para aprovechar las oportunidades de inversión (ESCALANTE, 2013).

En línea general, los créditos agropecuarios se destinan en un 57% para inversiones, el 28% para capital de trabajo y el restante 15% para normalización de cartera (FERNÁNDEZ, 2011). Algunas investigaciones indican que variables como la edad, grado de educación, hogares encabezados por hombres, tamaño de la granja, calidad de la tierra, acceso a infraestructura de riego y exposición al riesgo, son los principales factores que influyen en la asignación del crédito (FERNÁNDEZ, 2011).

Estudios realizados en Colombia, sobre la determinación de los factores que dificultan la canalización del crédito hacia el sector rural, señalan que un factor determinante, para los intermediarios financieros, lo constituye la precaria información en torno a la identificación de buenos clientes. Al investigarse a las entidades financieras acerca de la forma como evalúan en la actualidad el riesgo de nuevos clientes, los dos criterios de mayor trascendencia fueron la historia de crédito del cliente y el flujo de caja proyectado. Otros criterios como el crecimiento de las ventas del negocio, las utilidades recientes, la relación deuda-patrimonio, las garantías y la actividad económica del cliente parecen tener menor relevancia para los intermediarios financieros a la hora de evaluar el riesgo de un crédito. En relación con las particularidades de los clientes, cuya solicitud de crédito fue rechazada, las entidades financieras aseveraron que estos en su mayoría eran clientes nuevos; ello sugeriría, nuevamente, que la información crediticia del cliente es un elemento vital en el momento de evaluar la aprobación de un crédito (MURCIA, 2006).

Según Fernández y otros, la financiación del sector agrícola liderada por el sector público, es entendible debido a que la agricultura es una actividad de alto riesgo debido a los múltiples factores externos que introducen incertidumbre en el proceso de producción, como lo son las variaciones del clima, las plagas, las fluctuaciones de los precios tanto de los insumos como de los productos, el marco político-económico en temas de intercambio, entre otros

(FERNÁNDEZ, 2011). Por lo tanto, un modelo de crédito dirigido en el sector rural, implica un alto grado de intervención directa del gobierno en la asignación de recursos financieros a través de las instituciones especializadas de crédito agrícola de su propiedad y bajo su administración.

El Ministerio de Agricultura ha sido normalmente el responsable de la formulación de la política de financiamiento a la agricultura, mientras los bancos públicos agrícolas son regulados por una legislación especial diferente de la ley bancaria y controlados y supervisados por oficiales del gobierno (ACEVEDO, 2002). Es así que la relación entre el crédito y el crecimiento de las economías plantea una preocupación de investigadores y organismos alrededor del mundo. Tal es así que diversos estudios han planteado esta problemática desde diferentes perspectivas, que además de determinar la causalidad entre ambas variables buscan conocer los factores que determinan el crédito y de esta manera demostrar si una determinada restricción de este procede de variables que afectan la demanda o la oferta crediticia (CARVAJAL, 2005).

Son muchos los factores que se convierten en obstáculos para el libre acceso al financiamiento del sector rural, se pueden citar por el lado de la demanda: los elevados costos de transacción para los deudores y depositantes, falta de capacidad de endeudamiento de los hogares empresas rurales, falta de productos financieros y no financieros adecuados a las necesidades de los beneficiarios finales y falta de información adecuada sobre los servicios de crédito. Y por el lado de la oferta, las transacciones financieras rurales encuentran serias dificultades como consecuencia de la deficiencia de la información que dificulta la evaluación del riesgo de prestar, incentivos de los deudores y de los acreedores que no son necesariamente compatibles, lo que da origen al riesgo moral, dificultades para hacer valer los contratos lo que acentúa las posibilidades de pérdida por falta de recuperación de los préstamos, dificultades para diversificar los riesgos y diluir los costos fijos de la infraestructura financiera (ACEVEDO, 2002).

Características del Microcrédito rural en Colombia

El microcrédito en Colombia en su definición está centrada en las microempresas, y es entendida como aquella actividad de crédito con destino productivo que se otorgan a las microempresas y cuyo monto individual no supere los 120 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv).

En América Latina el 50 % de los microcréditos son gestionados ante las ONG's, un 25 % por entidades vigiladas como son las Compañías de Financiamiento Comercial (CFC) y el 25 % restante, por bancos comerciales.

Es bueno significar, que el sector financiero colombiano ha hecho importantes esfuerzos para ampliar los niveles de cobertura en la población a través de las microfinanzas. A pesar de estos esfuerzos, las entidades no llegan al número de clientes que quisieran atender, toda vez que las mismas ven limitada su operación por una tasa de colocación que no permite la sostenibilidad de créditos de montos mínimos (GILDER.G, 2015).

El cubrimiento del sistema financiero colombiano en el área rural, está a cargo del Banco Agrario y las cooperativas de ahorro y crédito. El banco posee 611 sucursales que representa un cubrimiento algo mayor al 60% en comparación a las demás entidades bancarias. Las Cooperativas son 405 entidades en todo el territorio nacional. Sin embargo, en Colombia hoy existen 1.089 municipios, de los cuales el 30.5% no cuentan con servicios financieros de ningún tipo (LOPEZ, 2005)

El hecho de que solo existía un 30.5 % de cubrimiento financiero en el sector rural, indica que hay dificultades para el acceso al crédito en el área rural. Se argumenta que existen factores que dificultan el acceso al microcrédito productivo en el sector Rural, como lo es la legislación colombiana, las garantías que son exigidas por las diferentes entidades que prestan el servicio del micro crédito, el problemas de capital que tienen estas entidades y los mecanismos de operación de las entidades que prestan el servicio de microcrédito.

Otro aspecto que dificulta el acceso al crédito en el sector rural, es la falta de información para el financiamiento de tales créditos, lo cual, puede generar racionamiento del mismo. En

cuanto al racionamiento de crédito, Stiglitz y Weiss (STIGLITZ, 1981) trabajaron dos enfoques básicos de racionamiento de crédito con información asimétrica: la selección adversa y el riesgo moral. Por una parte el agente financiero o prestamista es incapaz de identificar proyectos de inversión exitosos o no exitosos (que le permitan esclarecer el tipo de riesgo) y suponen que las tasas de interés más elevadas atraerán a proyectos y deudores más riesgosos. Sin embargo, Éste mecanismo no puede ser usado para asignar los fondos prestables y deciden racionar el crédito.

En cuanto al riesgo moral, este surge cuando a los deudores les resulta posible tomar acciones más arriesgadas que las convenidas una vez que los fondos son desembolsados. Es decir, no existe, o es muy costoso, el seguimiento de los créditos y por ello deciden racionar el crédito. En el sector rural, debido a la condiciones del entorno, hay poca información que garantice a los prestamistas una mayor claridad sobre el riesgo crediticio, en ese sentido, se dificulta que los intermediarios financieros tradicionales (bancos) no coloquen créditos a todos los solicitantes porque los deudores no pueden demostrar la viabilidad de sus proyectos y la capacidad de pago por la información imperfecta y los altos costos de adquirirla. La solución que se ha dado a los problemas de información asimétrica es la exigencia de activos como garantías que respalden la deuda. Sin embargo, los prestamistas rurales por lo general son de bajos ingresos y no cuentan con este tipo de activos. (PRADO, 2002).

Ante la dificultad de la facilidad del crédito por parte del sector bancario, surgen las alternativas del crédito informal, asociativo y con garantías ofrecidas por el gobierno. A la anterior, situación, se le suma el hecho de que en el sector rural colombiano no existe una infraestructura adecuada para el mercado de créditos, por lo tanto, el acceso al crédito en el área rural de Colombia es limitado y segmentado; y entre las causas que haya restricción al acceso se menciona la violencia en las zonas rurales, la inadecuada producción en las mismas, la deficiencia en la estructura legal y la inadecuada intervención pública.

Otro aspecto a tener en cuenta, como limitante para que los propietarios y trabajadores de las áreas rurales accedan al crédito, es lo referente a la capacidad de pago, debido a que la mayoría de las personas que laboran la tierra, cuentan con una economía de subsistencia, que

se caracteriza por el mantenimiento de un nivel de vida de acuerdo a su contexto rural, contrario al sentido económico de la racionalidad de maximización de ganancias. Según Ferrari, el ingreso de los hogares campesinos resulta de la distribución del ingreso producido por su parcela o ìcuasalarario (CW) (FERRARI, 2001.). Este ingreso se define como la diferencia entre el precio de los productos agropecuarios menos los costos, incluyendo los costos de producción como abonos, semillas, alimento de los animales, además de las rentas pagadas por aparcería o arrendamiento de la tierra. Es importante precisar que dentro de este ingreso (Y) se considera el autoconsumo: la parte de producción (X) de la unidad familiar que no se destina al intercambio, sino, que se consume en la misma familia. En atención a lo que plantea Ferrari, en el hogar campesino, no se da un excedente económico, que permita una reposición del capital solicitado por vía de préstamo, siendo este factor un impedimento para que se pueda gestionar el mismo en el área rural.

Por todo lo anterior expresado, resulta conveniente en Colombia, la financiación de capital para el sector rural mediante el sector público.

Los Programas y las Instituciones de crédito en Colombia

En cuanto a la facilidad de crédito en el sector rural en Colombia se menciona algunas entidades bancarias e instituciones de apoyo al crédito rural, y una de las instituciones más notorias es el Banco Agrario.

El Banco Agrario -BA en Colombia, es una entidad pública que a diferencia de las privadas tiene el objetivo de facilitar el acceso al crédito rural con mejores condiciones.

La presencia de las ONG financieras, cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades orientadas al microcrédito es escasa en el área rural, debido a la lejanía y a los factores ya mencionados, por lo que la principal fuente de financiación de los microempresarios es la banca pública, representada a través del Banco Agrario.

El Banco Agrario de Colombia fue creado con el objetivo principal de prestar servicios bancarios al sector rural, con autorización para financiar actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Recientemente, la entidad ha diseñado un

conjunto de líneas de microcrédito que son otorgados a proyectos (no necesariamente agropecuarios) que sean técnica y económicamente viabilizados por el SENA. Estas líneas suministran financiación a microempresarios que demuestren al menos doce meses de experiencia en la actividad o al menos seis meses de atención al público en el local actual. De otra parte, el Banco Agrario maneja líneas especiales de crédito financiadas por BANCOLDEX para las micro, pequeñas y medianas empresas, destinadas a inversiones en activos y mejoras en la productividad. Por otra parte, las líneas del BA de microcrédito rural son las siguientes: FINAGRO; PADEMÉR y Mujer Rural. A través de ellas se pretende adaptar métodos y técnicas (tecnología de créditos) adecuados a las características de las pequeñas unidades productivas rurales.

En cuanto al Gobierno nacional, este ha diseñado un conjunto de programas destinados a favorecer el microcrédito rural, los cuales son coordinados por el Ministerio de Agricultura, el cual otorga recursos a entidades financieras especializadas en la provisión de crédito al sector rural a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), diseña programas de seguimiento al empresario y apoya los programas de bancarización en el campo.

FINAGRO fue creado por la Ley 16 de 1990 y nació de la necesidad del sector agropecuario y rural de contar con un Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y tener una entidad autónoma y especializada en el manejo de los recursos de crédito para el sector rural. El programa de microcrédito coordinado por este fondo administra los recursos entregados hasta hoy mediante convenios interadministrativos con el Ministerio de Agricultura. Uno de los programas emblemáticos del Gobierno, administrado a través de FINAGRO, fue el Programa de Oportunidades Rurales - PADEMÉR, cuya vigencia culminó en 2006. Actualmente este ente se encarga de coordinar los esfuerzos destinados a la expansión del microcrédito en estas áreas. El PADEMÉR fue un proyecto que surgió en 1996, soportado en un préstamo realizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA⁴ al Gobierno colombiano (único en América Latina destinado al microcrédito rural), y cuyo objetivo principal era

⁴ El FIDA es una institución financiera internacional y un organismo especializado de las Naciones Unidas consagrado a erradicar la pobreza y el hambre en las zonas rurales de los países en desarrollo

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares rurales a través de la provisión de mecanismos de financiación ajustados a sus necesidades.

Los esfuerzos iniciales se vieron frustrados, debido a los pobres resultados de la primera fase del proyecto, esto conllevó a una reestructuración del programa en el año 2000. Entre agosto de 2002 y diciembre de 2006 el PADEMÉR, atendió 20.045 familias rurales pobres, organizadas en 12.959 microempresas, entregando incentivos por \$18.217 millones. Los resultados del programa excedieron las expectativas entregando microcréditos a 9.407 empresarios por un monto de \$15.768 millones (FIDA, 2010).

El FIDA, está diseñado para favorecer inicialmente a los microempresarios rurales de la región Caribe, en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, así como los proyectos de la región Andina, en Boyacá y Santander. Entre julio de 2007 y junio de 2010, el Programa de Oportunidades Rurales realizó la cofinanciación de proyectos por \$49.383 millones, beneficiando a 28.832 familias, mejorando las condiciones de producción y comercialización de sus productos, sobrepasando ampliamente las metas fijadas para el cuatrienio.

Las Organizaciones No Gubernamentales - ONG, en algunos países del primer mundo, dirigen programas de ayuda que pretenden llegar a los más pobres: de manera rápida, con costos operacionales bajos y resultados efectivos, y en el propósito de evitar la intervención estatal en dichos procesos, debido a que muchas veces algunos agentes o instituciones de los Estados han propiciado la malversación de los recursos; debido a esta situación, las ONG han emprendido la tarea de asistencia social y reconocidas oficialmente por la ONU hace unos cincuenta años. Sin embargo, el asistencialismo, en la actualidad ha sido revaluado pues se llegó a la conclusión que no producía los efectos deseados en torno a generar procesos de desarrollo en los países del primer mundo, debido a que los programas asistencialistas aunque atenuaba las problemáticas sociales de los más pobres no las solucionaba.

DISCUSIÓN

Los comentarios que resultan son diversos, tanto así que cada uno de los aspectos teóricos desde la óptica empresarial, económica organizacional, tiene su aplicación en los planes

(cualquiera de ellos), que impulsa el gobierno de Colombia para la transformación del contexto social del sector agrícola, entre los comentarios que se suscitan se presentan:

Primero. La incidencia de diversos factores en la crisis o el problema de la tierra en Colombia, debe contener la voluntad ineludible del gobierno para solucionar la problemática, esta voluntad se debe reflejar no solo en los esfuerzos, sino en la efectividad de los mismos, porque los beneficios que se promueven con los programas terminan no siendo accesibles a las personas que los requieren y el ciclo continúa, la omisión es inmensa, no se ha entendido por parte de las autoridades administrativas que cada sector del agro y que debido a las condiciones de las regiones, la problemática tiene distintos matices, el país y la aplicación de las políticas del agro, deben adaptarse a realidades que son evidentes, como la falta de recursos por parte de unos campesinos y la de seguridad por otros, los programas deben ajustarse a esas necesidades y cumplir con las condiciones para el efectivo cumplimiento de los objetivos.

Segundo. Si bien es cierto en este artículo se utilizó como ejemplo uno de los muchos planes que poner en marcha para enfrentar la problemática objeto de estudio, las condiciones de los programas emprendidos por el gobierno nacional son similares, posteriormente se presentan las incidencias teóricas, económicas y empresariales, y entonces surgen mil preguntas como ¿Por qué no se aplica esto en los planes iniciados por el gobierno?, ¿Por qué no se aplican las estrategias, el pensamiento estratégico? ¿Por qué no se piensa en que ese plan debe ser competitivo? O por lo menos el resultado de los programas debe ser competitivo.

Tercero. Existe un abismo entre la aplicación de los planes y el acompañamiento y/o seguimiento, solo se enuncian los resultados de los programas, o más bien los posibles resultados, que finalmente quedan en el papel, es triste ver como no existe un seguimiento serio a los programas que se inician, porque años después los programas adelantados no funcionan y porque no se tienen en cuenta esas situaciones, además, los planes se desarrollan desconociendo el espacio que tienen los actores principales como es el caso de los campesinos, lo que finalmente se denota en una clara afectación a las estrategias de

crecimiento y mejoramiento del microcrédito, y entender que de la forma en que se desarrollan estos planes no contribuyen a la solución.

CONCLUSIÓN

Para el logro de los propósitos de la generación de una transformación del contexto social en el agro colombiano se precisan de una serie de medidas complementarias y el seguimiento permanente a las ideas de negocios, esto con el fin de brindar un acompañamiento y una guía a los campesinos. Una de las medidas es incrementar los agro créditos, que estos créditos sean consecuentes con los ciclos productivos de los negocios desarrollados por los campesinos, motivar e incentivar los mercados campesinos, esto con el fin de potencializar los ingresos por concepto de comercialización de productos generados de la actividad agrícola y garantizar la generación de espacios que posibiliten el acceso a los ingresos, así como la sostenibilidad de los proyectos. Los actores principales a promover este tipo de iniciativas son las entidades gubernamentales y la empresa privada.

Referencias Bibliográficas

ACEVEDO, R y DELGADO, J. El papel de los bancos de desarrollo agrícola en el acceso al crédito rural. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Desarrollo Sostenible 2002.–[En línea]: <http://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document-1.9.36351/el%20papel%20de%20los%20bancos%20de%20desa.pdf>

ARCE, José Luis. El sector de las microfinanzas en Costa Rica: Evolución reciente y aporte al crecimiento y desarrollo económicos. San José: 2006. 23 págs. Disponible en www.estadonacion.or.cr/Info2006/Paginas/ponencias.htm.

ARIZA M, BARÓN W, OBREGÓN N, PINEDA y VELOSA F. Modelo de selección de riesgo, aplicado al otorgamiento de microcrédito en un intermediario financiero de crédito colombiano, apoyado en redes neuronales artificiales. Universidad Piloto de Colombia, Programa de Ingeniería Financiera. Bogotá, Colombia, 2011. [En línea]: http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/v1_12_microcredito_colombiano_publicar.pdf

BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y MINISTERIO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA. Situación actual del microcrédito en Colombia: características y experiencias. Temas de Estabilidad Financiera Bogotá. 2010. -[En línea]: [http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/Tema1_sept .pdf](http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/Tema1_sept.pdf) 70

CARO, J. La Dimensión de las Microfinanzas Rurales en América Latina: Un Análisis Comparativo de Cuatro Países. 2003- RIMISP. -[En línea]: http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/115272227634_3_DimensionMicrofinanzas.pdf •

CARVAJAL, A. Los determinantes del crédito: el caso ecuatoriano. Subdirección de Estudios. Superintendencia de Bancos y Seguros, 2005. -[En línea]: http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Tecnicos/Notas%20en%20Finanzas%20No.%203.pdf

CATULLO, J.; Diferencias entre las Microfinanzas y las Finanzas y las Tradicionales. En: Finanzas Rurales. Argentina - Noviembre 2006. [En línea]. [Visitado octubre de 2008] Disponible en Internet <http://www.inta.gov.ar/extension/finan/fr/news5.pd>

CUEVAS, C.E y TABER.L Regular Fiance In M.M. Giugale, O Lafourcade and C. Luff (2002). Colombia. The Economic Foundations of Peace.The World Bank, Washington, D.C.

CASTAÑEDA, A y FEDUL, M. Globalización y crisis económica. Iniciada en la financiación de unidades de pequeña escala. Fundación Corona-Fundación Ford. Bogotá. 2002.

ESCALANTE, R., CATALÁN, H, y BASURTO, S. Determinantes del crédito en el sector agropecuario mexicano: un análisis mediante un modelo Probit. Cuadernos de Desarrollo, 2013. -[En línea]:

<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/6270>Rura 1, 10(71), 101-124. 71

FERNÁNDEZ, D, PIÑEROS, J Y ESTRADA, D. Financiamiento del sector agropecuario: situación y perspectivas. Temas de Estabilidad Financiera, no. 59, 2011. -[En línea]:<http://www.banrep.gov.co/en/node/23425>

FERRARI, César. Política económica y mercados. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá· D.C 2001Memorias. Congreso colombiano de microcrédito 2005.

FINAGRO. 2010. www.finagro.gov.co. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FIDA. 2010. www.ifad.org.

GUACHAMÍN M Y CARDENAS R. Análisis del microcrédito en el período 2002-2006, su sostenibilidad financiera e impacto económico en el ecuador. Escuela Politécnica Nacional. Facultad de Ciencias Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras. Quito, 2007. -[En línea]: <http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/977/1/CD-1285.pdf> 72

KIRKPATRICK, C AND MAIMBO S.M. The implications of the evolving Microfinance Agenda for Regulatory and Supervisory Policy. Development Policy review, 20(3):293-304. 2002.

LARA J. La gestión del riesgo de crédito en las instituciones de microfinanzas. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad De Granada. 2010. [En línea]:

<http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/5648/1/18892656.pdf>

MURCIA, A y PIÑEROS, J. Situación del crédito en Colombia desde la perspectiva del sector financiero. Temas de Estabilidad Financiera. Banco de la República.2006. -[En línea]: <http://www.banrep.gov.co/es/node/24544>.

OSSA, N. Productos y servicios financieros a gran escala para la microempresa: hacia un modelo viable. Grupo de investigación en finanzas y banca. Departamento de finanzas. Universidad EAFIT. 2004. -[En línea]:

<http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/cuadernosinvestigacion/article/download/1324/1195>.

PRADO, MILLER y GONZALEZ. El reto de las microfinanzas en América Latina: la visión actual. Corporation Andina de Fomento. Caracas 2002.

RODRÍGUEZ M. El microcrédito. Una mirada hacia el concepto y su desarrollo en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Maestría en Ciencias Económicas Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá, 2010. [En línea]:

http://www.bdigital.unal.edu.co/2133/1/Tesis_Maria_Demelza_Rodriguez.pdf

RODRÍGUEZ, A. G. La realidad de la Pyme colombiana. FUNDES Internacional.2003.

ROMANI CHOCCE, Gianni Augusta. Impacto del microcrédito en los microempresarios chilenos: Un estudio de caso en la II Región de Chile. Anales del Congreso CLAD, Lisboa: 2002. 24 págs. Disponible en: www.cyta.com.ar/referente/comite/evaluador_gianni.htm

STIGLITZ, Joseph y WEISS. Credit rationing in markets with imperfect information. The American economic review, Vol. 71, No. 3, 1981.

WENNER, M.; Managing Credit Risk in Rural Financial Institutions in Latin America, Interamerican Development Bank. En: The Microfinancegateway. EEUU. Mayo 2007 pp. 36.

<http://www.microfinancegateway.org/content/article/detail/41522>

YUNUS, Muhammad. Hacia un mundo sin pobreza. Santiago de Chile: Ed. Andrés Bello, 1997. 333 p.

ZARRUK G., Carlos Alberto. Microfinanzas en Colombia. En Debates de Coyuntura Social. No. 17 (Junio, 2005); págs. 34 – 39.

ZAPATA, D. Caracterización de las variables determinantes del riesgo en el microcrédito rural. Tesis Maestría, Universidad Nacional de Colombia. 2010. –[En línea]:

<http://www.bdigital.unal.edu.co/2005/#sthash.UOWc4o68.dpuf>

<http://www.caf.com/media/3895/RED2011.pdf>